

*Procuración General de la Nación*

Suprema Corte:

-I-

Transnoa S.A., en su condición de concesionaria del transporte de energía eléctrica por distribución troncal en el noroeste argentino, otorgada por el Estado Nacional, con domicilio en la Capital Federal, promueve la presente acción declarativa, en los términos del art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, contra la Provincia de Salta, a fin de que declare la ilegitimidad e inconstitucionalidad de la pretensión de la demandada de aplicar al servicio público que desarrolla —en especial, a la operación y mantenimiento de las instalaciones— el Impuesto a las Actividades Económicas (ingresos brutos) —Convenio Multilateral— contemplado en los arts. 159 y sgtes. del Código Fiscal (decreto-ley 9/75 y sus modificatorias).

Cuestiona dicha pretensión fiscal pues sostiene que el servicio público que desarrolla constituye transporte interjurisdiccional de energía eléctrica concesionado por el Estado Nacional y, como tal, está exento de tributar el referido gravamen, por lo que la determinación efectuada a su respecto por la provincia resulta violatoria de las leyes federales 15.336 (arts. 1°, 6°, 9° y 12) y 24.065 (arts. 1°, 3°, 5°, 7°, 22, 29, 30, 35, 40 al 50, 85, 86, 89, 93 y 98), que regulan la materia eléctrica y que la eximen de pagar dicho impuesto, y colisiona también con el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento.

En consecuencia, afirma que el Estado local desconoce la competencia del Gobierno Nacional (art. 42 de la Constitución Nacional) para el establecimiento de los marcos regulatorios de los servicios públicos que concesionó y tampoco tiene en cuenta lo dispuesto en el art. 75, incs. 13, 18

y 30, que reserva al Congreso Nacional la facultad de reglamentar el comercio interprovincial y la política energética nacional, y en el art. 31, en tanto se viola el principio de supremacía federal, toda vez que la ley nacional exime del tributo y, por otro lado, la provincial lo grava, pretendiendo que prevalezca esta última.

Por otra parte, cita como tercero al Estado Nacional, en los términos del art. 94 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, por haber garantizado, en su carácter de autoridad concedente, que no estaría sujeto a ningún tipo de gravamen que modifique el sistema remuneratorio del servicio, por lo cual, ante la hipótesis de resultar vencida en autos, tendrá una acción contra éste por indemnización de los perjuicios que sufra.

Por todo ello, solicita al Tribunal la concesión de una medida cautelar de no innovar, a fin de que la provincia demandada se abstenga de llevar adelante cualquier acción tendiente a la percepción del citado gravamen hasta que se dicte sentencia en esta causa.

En este contexto, V.E. corre vista a este Ministerio Público, por la competencia, a fs. 30.

-II-

Uno de los supuestos en que procede la competencia originaria del Tribunal, según el art. 117 de la Constitución Nacional, es cuando una provincia es parte en la causa y la acción entablada se funda directa y exclusivamente en prescripciones constitucionales de carácter nacional, en leyes del Congreso o en tratados con las naciones extranjeras, de tal suerte que la cuestión federal sea la predominante en el pleito (Fallos: 115:167; 122:244; 292:625 y sus citas; 311:1588, 1812 y 2154; 313:98 y 548; 315:448, entre otros).

A mi modo de ver, en el *sub examine* se presenta tal

*Procuración General de la Nación*

circunstancia, toda vez que, de los términos de la demanda, se desprende que la sociedad actora acciona contra una provincia y sustenta su pretensión en disposiciones de inequívoco carácter federal, como son las que integran el marco regulatorio eléctrico nacional, por lo que cabe asignar manifiesto contenido de esa naturaleza a la materia sobre la que versa el pleito (Fallos: 320:1302; 322:1781, 2331, 2624 y 2862; 323:1716 y 3949, entre otros).

Asimismo, entiendo que la causa se encuentra entre las especialmente regidas por la Ley Fundamental a las que alude el art. 2º, inc. 1º de la ley 48, pues en ella se debate un tema vinculado a la preservación del ordenamiento de las competencias entre las provincias argentinas y el Gobierno Federal que la Constitución confiere al Gobierno Nacional (Fallos: 308:610; 310:877; 311:919, 1900 y 2154; 313:127; 314:508 y 1076; 315:1479, entre otros), por lo cual, al ser demandada una provincia en una causa federal, cualquiera que sea la vecindad o nacionalidad de la actora (Fallos: 310:697; 311:810, 1812, 2104 y 2154; 313:98 y 127; 314:862), el juicio corresponde a la competencia originaria de la Corte.

Por otra parte, la actora dirige su pretensión contra la Provincia de Salta y cita como tercero, en los términos del art. 94 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, al Estado Nacional, al considerar que la controversia le es común, por lo que entiendo que la única forma de conciliar lo preceptuado por el art. 117 de la Constitución Nacional respecto de las provincias, con la prerrogativa jurisdiccional que le asiste a la Nación —o a una entidad nacional— al fuero federal, sobre la base de lo dispuesto en el art. 116 de la Ley Fundamental, es sustanciando la acción en esta instancia (Fallos: 305:441; 308:2054; 311:489 y 2725; 312: 389

y 1882; 313:98 y 551; 322:1043 y 2038; 323:702, 1110 y 3873, entre otros).

En tales condiciones, opino que, por ambas razones, este proceso debe tramitar ante los estrados del Tribunal.

Buenos Aires, 8 de agosto de 2002.

NICOLAS EDUARDO BECERRA

ES COPIA